



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

.Junio dieciséis (16) de dos mil veintiuno (2021)

Radicado: 05001 - 31- 05 – **021-2016-00481-01**
Demandantes: JAIME LEÓN NARANJO CRUZ - DORIS MARÍA CEBALLOS LONDOÑO
Demandado: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: CULPA PATRONAL.

La sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral adelantado por **JAIME LEÓN NARANJO CRUZ y DORIS MARÍA CEBALLOS LONDOÑO** en contra de **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S** (en lo sucesivo **ZENÚ**).

Decisión que se emite de manera escrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Pretenden los demandantes con el escrito de la demanda, que se declare que la enfermedad profesional que padece el señor Jaime León es consecuencia directa y natural de la culpa de la demandada. Con fundamento en lo anterior, señalan que a la accionada ha de imponérsele condena por la indemnización total y ordinaria de perjuicios establecidos en el artículo 216 del CST, al efecto, pretenden como perjuicios patrimoniales, se les conceda la suma de \$75.638.485 como lucro cesante consolidado

y \$102.178.497 por lucro cesante futuro; como perjuicios extrapatrimoniales, solicitan que para cada demandante le sea reconocida la suma de \$38.661.000 por perjuicios morales y, únicamente para el demandante, la suma de \$77.332.000 por perjuicios a la vida en relación o a las condiciones de existencia o a la salud. Finalmente solicitan condenar a la pasiva a lo que ultra y extra petita resulte probado y a las costas y agencias en derecho.

A partir del material probatorio aportado al proceso, el juzgador unipersonal declaró que la enfermedad laboral del señor Jaime León Naranjo Cruz tuvo origen en la culpa del empleador, consistente en la conducta omisiva de la demandada Industrias de Alimentos Zenú al no cumplir la obligación de garantizar la seguridad y salud del trabajador en los términos de los artículos 57 y 348 del CST. Por lo anterior, impuso condena en favor de los demandantes así: para Jaime León Naranjo Cruz, \$32.761.020 por lucro cesante consolidado, \$80.372.192 por lucro cesante futuro, \$9.374.904 (12 SMLMV) por perjuicios morales y \$9.374.904 (12 SMLMV) por daño a la salud, los que equiparó a perjuicios a la vida en relación en la parte motiva de la sentencia. Para Doris María Ceballos Londoño, la suma de \$4.687.452 (6 SMLMV) por perjuicios morales. Adicionalmente, el a quo dispuso que las anteriores sumas fueran indexadas al momento de su pago, teniendo como extremo inicial la fecha de la diligencia, 11 de octubre de 2018 y, por último, condenó a la demandada al pago de agencias en derecho en la suma de \$13.657.047, equivalente al 10% de las sumas reconocidas, las cuales dispuso ser divididas entre los demandantes en proporción a las condenas reconocidas a su favor.

Esta decisión fue objeto de impugnación por los apoderados de ambas partes.

Al efecto, la activa apela la decisión adoptada respecto de las condenas impuestas por perjuicios morales, por los fisiológicos y a la salud, pues a su criterio, las sumas reconocidas por estos conceptos son muy bajas, ya que el juez de primera instancia erró en determinar que estos perjuicios se compensan con el hecho que el demandante aún se encuentre laborando para la demandada, pasándose por alto las limitaciones de la vida en relación del núcleo familiar.

Por su parte, el apoderado de la demandada solicita sea revocada la sentencia de primera instancia en su totalidad, ya que el análisis de la carga de la prueba fue indebidamente aplicado, pues al no invertirse la misma mediante auto notificado a las partes, en cabeza del demandante se encontraba la obligación de probar todos los supuestos de hecho alegados, tales como el daño, el vínculo y la omisión del empleador, lo cual no sucedió en el presente proceso, pues el demandante no probó el nexo causal existente entre su enfermedad con la omisión de la pasiva, quien por el contrario, afirma haber actuado con diligencia y cuidado al haberle suministrado los elementos y herramientas de trabajo necesarios para mitigar sus esfuerzos, por lo que considera improcedente la culpa patronal declarada. Bajo ese mismo hilo conductor, menciona que, al no existir culpa, no hay lugar a la declaratoria de perjuicios morales, ni mucho menos lucro cesante, ya que no hay prueba de los mismos y no ha habido supresión económica para el actor pues el vínculo contractual con la demandada se ha mantenido vigente sin que haya una supresión injustificada de su patrimonio.

ALEGATOS

Dentro del término de traslado que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la activa solicita sea parcialmente revocada la sentencia de primera instancia y, en su lugar, sean reconocidos los perjuicios morales y el perjuicio a la vida de relación o a las condiciones de existencia o a la salud, de conformidad con los elementos facticos que se han acreditado en el presente proceso y de conformidad con los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral-, tales como la SL4570-2019, pues existen suficientes consideraciones de hecho que se expusieron y acreditaron de cara a la valoración y reconocimiento de cada una de las pretensiones que se formularon, en especial, el perjuicio moral y el perjuicio a la vida de relación o a las condiciones de existencia o a la salud.

Así mismo, dentro del término conferido a la pasiva, fueron presentado sus alegatos de conclusión, quien argumenta que ha de revocarse la decisión de primera instancia, en la medida que hubo una inadecuada valoración de los medios de prueba por parte del a quo, quien desconoció la prueba documental aportada con la contestación de la

demanda, la cual da cuenta que la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo encaminadas a proteger la integridad de los trabajadores se desarrolló a medida que evolucionaba la normativa aplicable a la materia, habiendo dotado siempre al señor Jaime León Naranjo de todos los elementos de protección necesarios para el desarrollo de sus labores, contando con capacitaciones para la ejecución de sus labores y se hizo uso de equipos que permitían realizar el trabajo de forma mecánica limitando así la utilización de la sola fuerza de su cuerpo, como aquellas llamadas “mulitas” mencionadas por los testigos de la parte actora, los cuáles también fueron trabajadores de la sociedad, incluso con anterioridad de la vinculación del demandante. Menciona que no hay prueba, técnica o legal, de existir un nexo causal entre el síndrome de espalda fallida y la enfermedad de tipo psicológico que el demandante, y su cónyuge, dicen sufrir, pues de tal afectación tampoco existe medio de prueba, por lo que los perjuicios reconocidos, por concepto de daño moral y daño a la vida de relación no están probados y no se encuentra acreditado ningún nexo de causalidad al respecto. Además de señalar que el a quo erró en la condena impuesta por concepto de lucro cesante, consolidado y futuro, pues desconoció que al interior del proceso se probó que el contrato laboral se ha mantenido en el tiempo, devengando el trabajador sus ingresos salariales y prestaciones, efectuando el debido pago de las incapacidades cuando éstas se presentaron, garantizando la permanencia del empleo, conforme se confesó por el actor y se acreditó documentalmente.

CONSIDERACIONES

Es importante poner de presente que, a partir de las pruebas aportadas al proceso, en esta instancia se encuentran por fuera de discusión los siguientes presupuestos fácticos: *i)* Que el señor Jaime León Naranjo Cruz ingresó a trabajar en favor de Industrias de Alimentos Zenú S.A.S desde el 19 de mayo de 1980 (aceptación al hecho primero - fl. 134). *ii)* Que el demandante le fue diagnosticado síndrome de espalda fallida con trastorno depresivo asociado e inicio de sintomatología en el año 1994 (respuesta a hecho segundo fl. 134); *iii)* que el demandante presenta una pérdida de capacidad laboral del 34.22% de origen laboral con fecha de estructuración del 29/11/2013, por diagnóstico de síndrome de espalda fallida (respuesta a hecho décimo

fl. 134 y dictamen N°70506419 expedido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez fls. 59 a 64) y **iv)** Que los demandantes son cónyuges (fl. 73).

En este orden de ideas y en virtud del principio de congruencia, le corresponde a esta Corporación determinar: Si existió responsabilidad a título de culpa patronal por parte de Industrias de Alimentos Zenú S.A.S en la enfermedad profesional padecida por el demandante. En caso afirmativo, si la sociedad demandada se encuentra llamada a responder por indemnización integral de perjuicios-en favor de ambos demandantes.

Culpa Patronal.

En lo que tiene que ver con la culpa patronal, el artículo 216 del CST consagra la indemnización ordinaria y plena de perjuicios con ocasión de una enfermedad profesional o accidente de trabajo que sufra el trabajador. Este tipo de indemnización entraña un elemento esencial para su constitución, cual es la demostración de la responsabilidad subjetiva del empleador en la ocurrencia del suceso, carga probatoria que, dicho sea de paso, le corresponde al trabajador o a sus causahabientes.

La jurisprudencia de la CSJ, ha reiterado que la culpa a que se refiere el citado artículo, y que corresponde al accionante demostrar, es hasta la leve; es decir, aquella producto de la falta de diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios o la del buen padre de familia de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Código Civil. Igualmente ha señalado que tratándose del deber de prueba de la diligencia contractual *“ha de valer la que impone el artículo 1604 del C.C. según la cual la prueba de la diligencia incumbe al que ha debido emplearlo”*.

Determinado entonces el grado de culpa a que se refiere el art 216 del CST, es menester recordar que dentro de las obligaciones generales y especiales a cargo del empleador (artículos 56, 57 y 348 del C.S.T.), se encuentran entre otras las de procurar a sus trabajadores, locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.

En otros términos, para que se abra paso al resarcimiento en comento, es preciso que, además de la demostración del daño a la integridad o a la salud del trabajador, con ocasión o como consecuencia del trabajo, se encuentre suficientemente comprobada la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, esto es, que exista prueba certera del incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad, que conforme al artículo 56 *ibidem.*, de modo general, le corresponden, y el nexo causal, con el accidente o enfermedad profesional padecida.

Así mismo, según las reglas de la carga de la prueba, la comprobación suficiente de la culpa patronal, le corresponde asumirla al trabajador demandante o sus beneficiarios, es decir, son aquellos, quienes además de demostrar el daño o lesión en la salud, deben comprobar la negligencia y descuido del empleador y su nexo causal. En esa misma línea, ha adoctrinado la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral que, una vez comprobada la negligencia u omisión en las obligaciones patronales, y teniendo en cuenta lo consagrado en el art. 1604 del Código Civil, si el empleador pretende cesar o desvirtuar su responsabilidad, debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal como lo dispone el art. 1757 *ibídem* (ver sentencias CSJ, SL 2707-2017, SL 17058-2017, SL633-2020 y SL1226-2021).

No se discute que el actor fue vinculado por la demandada el 19 de mayo de 1980, que padece una enfermedad de origen laboral con diagnóstico de síndrome de espalda fallida con inicio de sintomatología desde el año 1994 y una pérdida de capacidad laboral del 34.22% con fecha de estructuración del 29/11/2013.

Precisado lo anterior, y ya al evaluar las pruebas relacionadas con la conducta del empleador y su nexo causal con la pérdida de capacidad laboral del demandante, la Sala, encuentra lo siguiente:

- a) Interrogatorio de parte de Jaime León Naranjo Cruz (min 3:00 a 18:00), quien manifestó que en el año 1997 fue evaluado por medicina interna, que después del año 2005 la demandada suministró capacitaciones y elementos para

levantar peso, pues anteriormente sus labores eran muy manuales y debido a su enfermedad se ha afectado emocionalmente, y que si bien aún se encuentra laborando y devengando su salario de manera continua, sus ingresos se han visto afectados pues ha debido adquirir elementos para cuidar de sus problemas de columna. Menciona el actor que los elementos suministrados por la pasiva antes de 2005 eran botas, guantes y tapones de oído.

- b) Doris María Ceballos Londoño (min 18:00 a 21:00) comentó que su esposo fue vinculado a Industrias de Alimentos Zenú desde el año 1980, que a su esposo le han sido cancelados sus salarios e incapacidades por la demandada y que ella no ha tenido tratamientos psicológicos.
- c) Testimonio de Jesús María Palacio Arango, quien manifestó haber sido compañero del demandante por más de 30 años, expuso que el demandante, al igual que él, se dedicaban a levantar y mover bloques de carne y de hielo de aproximadamente 40 a 45 kilos, lo cual le consta en la medida que estos elementos debían pesarlos; que estas actividades las desempeñó el actor hasta el momento en el que lo reubicaron, lo cual sucedió alrededor de 14 años anteriores a la audiencia¹, esto es, año 2004; que la función de carga y traslado de carne y hielo se realizó aproximadamente entre el año 1980 hasta el año 2000 de manera manual o “a fuerza”, debiéndose agachar para levantar los elementos y cargarlos a “una mulita” o montacargas manual, la cual era alimentada entre varias personas y empujada “entre dos o tres”. Menciona el deponente que después del año 2000 les fueron suministrados equipos para realizar sus funciones, tales como elevadores y “ya no había que hacer fuerza”. Frente a las capacitaciones para desempeñar sus funciones, menciona que anteriormente no se las daban, las cuales comenzaron en el año 1995 o más adelante; que los elementos o herramientas de trabajo se limitaban a tapones de oídos, cuchillo, delantal y una montacargas manual o “mulita”. Finalmente, afirmó que el demandante presentó molestias de salud alrededor de 10 años después de haber ingresado a laborar en favor de la demandada.
- d) Testimonio de Eusebio Orlando Marín Álvarez (min 46:00 a 1:14:00), quien señaló haber sido compañero del demandante por más de 30 años; que como

¹ Diligencia celebrada el 11 de octubre de 2018 fls. 202 a 203

trabajador de oficios varios en Zenú, la función del actor era sacar una carne de unos recipientes metálicos, lo cual lo hacía de manera manual, debiéndose agachar para poder hacerlo; señala que el peso de la carne era de alrededor de 25 a 50 kilos, lo cual lo sabe porque la carne debían pesarla. Menciona que el actor también levantaba bloques de hielo, los cuales eran de 15 a 20 kilos de peso. Expone que el oficio que desempeñaba Jaime desapareció alrededor de 20 años antes de la audiencia, esto es en el año 1998, momento en el cual ya no debían cargar la carne y el hielo, pues hubo cambio de tecnología. Señala que no les suministraban cinturones o elementos para asistir las cargas; que como elementos de trabajo contaban con guantes, delantal y una especie de carro; que la actividad de carga se realizaba regularmente solos y que cuando había mucha carne, varios compañeros colaboraban; que las inducciones o capacitaciones se presentaron alrededor del año 1998; y que después de 10 o 12 años de haber ingresado a laborar a Zenú, el actor comenzó a presentar problemas de salud.

- e) Testimonio de la señora Luz Marina Cartagena Balzar (min 114:000 en adelante). Señala que conoce a los demandantes hace más de 38 años por razones de amistad; que hace 12 años aproximadamente evidenció el deterioro en la salud del actor, ayudándole ésta como auxiliar de enfermería, a suministrarle medicamentos para el dolor de espalda y lumbagos; que el demandante fue intervenido quirúrgicamente debido a esa problemática; que el señor Jaime León no ha dejado de trabajar y que la demandante, debido a las afecciones de su esposo, ha padecido dolor, tristeza y estrés, pues es quien acompaña al señor Jaime León a las citas y terapias.
- f) A fls 29 a 38 y 177 a 181 obra informe de estudio de puesto de trabajo del demandante, el cual menciona que como operario de maquina hidraulake el actor era el encargado de trasportar los bloques de carne de la cava o cuarto frio hasta la máquina para picar la carne, posteriormente trasportaba el recipiente con la carne picada hasta el proceso de molida. Así mismo, allí se menciona en el numeral 6.5 las características de los insumos utilizados por el señor Jaime, entre los cuales, se mencionan *“bloques de carne de res y pollo: se ubican 23 bloques de 30 hasta 60 kilos y recipiente metálico para el transporte*

de carne con 90 cm de altura, 1.57 de alto de largo por 80 de ancho. Peso lleno 700 kilos...” En el numeral 7 se expone que la actividad desempeñada por el actor consistía en “-ubicar bloques de carne en recipientes metálicos, -transportar recipientes metálicos hasta la máquina, -ubicar bloques de carne en la superficie de la máquina y -transportar recipiente metálico hasta el proceso de molido”. El numeral 7.1 refiere que para la actividad de “alimentar la maquina hidraufake” el operario, es decir, el actor, debía adoptar posición bípeda, levantar de una superficie a nivel del piso cada uno de los bloques de carne (peso aproximado 30 kilos), para lo cual realiza una flexión de tronco, sujeta el bloque con la mano derecha, corta plástico, lo retira, sujeta con sus dos manos el bloque realizando presión palmar, lo levanta y lo ubica en un recipiente metálico. Invierte aproximadamente 10 segundos por cada bloque teniendo en cuenta que por cada recipiente ubica 23 bloques. Continúa el informe señalando que para levantar los bloques de carne se realizaba una flexión de cuello de 0° a 10°, flexión de tronco de 0° a 70°, pierna derecha delante de la izquierda para lograr mayor estabilidad, lo sujeta y levanta para transportarlo hasta el recipiente metálico para lo cual se observa flexión de tronco de 0° a 20°, rotación con inclinación lateral izquierda de 0° a 20°. Frente a la duración en minutos durante la jornada, el informe señala “200 minutos, tiempo aproximado invertido 4 minutos en un recipiente metálico, durante un turno de trabajo debe llenar 50 recipientes. Intercala actividad con trasponerte de estibas y ubicación de bloques en una maquina 35.7% de la jornada”.

- g) De los documentos obrantes a fls. 29 a 38 y 177 a 181 y de lo mencionado en el hecho segundo y su respuesta, se evidencia que el actor se desempeñó como operario de producción picadora de carne hidraufake entre 1982 a 1987 y entre el año 1991 al año 2004.
- h) A fls. 31 a 65 del expediente reposan los diferentes dictámenes de pérdida de capacidad laboral del demandante, los cuales señalan los antecedentes médicos del actor respecto de su enfermedad profesional, observando múltiples consultas médicas y exámenes diagnósticos por molestias de espalda.
- i) Fls. 148 a 176 copia de historial médico de salud ocupacional del demandante, en la que se evidencia que los antecedentes de discopatía lumbar o lumbalgia

padecidos por el actor datan del año 1994; que entre las recomendaciones médicas que le siniestraron se encontraba la de no subir y bajar escalas y manejo de cargas hasta de 8 kilos².

Conclusión:

De acuerdo a la anterior información se evidencia que existió un nexo causal entre la patología de síndrome de espalda fallida que padece el demandante y la labor que desempeñó como operario de producción de picadora de carne hidraufake, pues entre 1982 a 1987 y entre el año 1991 y alrededor del año 1998, el actor debió levantar desde el suelo bloques de carne de aproximadamente de 30 a 50 kilos de peso de manera manual y sin asistencia mecánica, puesto que según los testigos escuchados, fue hasta en torno del año 1998 que fue adquirida maquinaria con la que los trabajadores y el mismo demandante, ya no debían de realizar esfuerzo físico para desempeñar sus funciones.

Sumado a ello, en el plenario no hay elementos que demuestren que con anterioridad a 1998 la demandada haya dado capacitaciones o elementos de protección para mitigar el riesgo de lesiones o problemas discales como el que padece el actor, pues, aunque a fls. 182 a 195 obra copia de “manual de implementación sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo”, el mismo no tiene fecha de operación ni tampoco hay elementos de convicción que demuestren que el mismo se haya puesto en práctica con anterioridad al año 1998, pues según los testigos que también laboraron en Zenú, fue solo hasta después de esa data que se comenzaron a realizar capacitaciones y recomendaciones para mitigar los riesgos de salud.

Ahora, la prueba del mero incumplimiento en la diligencia o cuidado ordinario o mediano que debió desplegar la demandada, se evidencia en el no suministro de elementos adecuados de protección, la no implementación de sistemas o medidas de prevención de riesgos y capacitaciones para ejercer funciones con anterioridad al año 1998 aproximadamente, pues según los testimonios escuchados, fue solo después de esa

² fl. 154 vto

fecha que se adquirieron equipos que permitieron reducir el esfuerzo físico de los trabajadores y se comenzaron a dictar capacitaciones.

Así las cosas, la abstención en el cumplimiento de la diligencia y cuidado debidos en la administración de los negocios propios, en este caso, las relaciones subordinadas de trabajo, constituye la conducta culposa que exige el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para erigir al empleador responsable de la indemnización ordinaria y total de perjuicios a los que haya lugar.

Por lo anterior, contrario a lo decidido en primera instancia, la sala habrá de revocar la decisión adoptada frente a la imposición de condena de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, ya que en tratándose de lucro cesante, entendido como aquella forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares, como consecuencia del daño y que ésta no se habría producido si el evento dañino no se hubiere verificado, debe distinguirse el pasado o consolidado y el futuro. El primero es el que se genera desde la ruptura o terminación del vínculo contractual y hasta la fecha de proferirse la sentencia; el segundo, surge desde la calenda en que se emite la providencia y hasta el cumplimiento de la edad conforme a la expectativa de vida probable del trabajador.

En el caso de marras, se tiene que si bien el señor Jaime León Naranjo Cruz tiene una pérdida de capacidad laboral del 34.22% de origen laboral con fecha de estructuración del 29/11/2013, la cual se presentó por culpa del empleador, lo cierto es que el actor confesó en su interrogatorio de parte que continuó laborando al servicio de Zenú devengando su correspondiente salario sin que obre prueba al interior del proceso que dicho vínculo se encuentra finiquitado, lo cual implica la no causación de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro.

Al respecto, en un caso similar al aquí planteado, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2494-2020 mencionó:

“Precisado lo anterior, encuentra la Corporación que los reproches contra la sentencia de segundo grado son acertados, i) al no advertir que no se configuró un daño material a favor del accionante y en contra de la demandada, cuando el empleador continuó dándole trabajo pues, se insiste, que el lucro cesante pasado o consolidado y futuro, surge en la medida en que, pese a la pérdida de capacidad laboral generada por el accidente laboral sufrido por el accionante, hubo una disminución o mengua en sus ingresos que permita evidenciar la generación de perjuicios de esta naturaleza, ello porque no hubo ruptura de su vínculo laboral, como quedó demostrado y verificado por el Tribunal, ya que continuó vigente el contrato de trabajo y, por ende, percibiendo su asignación mensual y demás derechos prestacionales, sin que se tenga certeza si ocurrió el finiquito del mismo y, ii) al determinar que el salario a tener en cuenta es el de la fecha del accidente, pues se debe tomar el de la terminación de la relación laboral.

En un caso de parecidas características, la Sala, en sentencia CSJ SL1361-2019, sostuvo:

Respecto del lucro cesante, debe señalarse que no hay lugar a imponer condena por este concepto, al no encontrarse acreditada su causación, ello teniendo en cuenta que estos corresponden a lo que la trabajadora dejó de recibir en razón de la ocurrencia del daño en virtud de la terminación del contrato de trabajo, lo que en este caso no ocurrió, por cuanto, como se sostiene en el informativo y no fue objeto de controversia, la actora continuó laborando al servicio de la pasiva, y fue reubicada en otro puesto en el área administrativa.

(...)

De ahí que el Tribunal erró al encontrar acreditado un perjuicio material (lucro cesante pasado o consolidado y futuro), cuando el trabajador no vio mermados sus ingresos, pese al accidente de trabajo sufrido, por cuanto siguió activo prestando su fuerza laboral a favor de la demandada.”

Considera la sala que más allá de los decires del actor, referente a haber solventado los gastos de su patología y adquirido elementos como colchones o cojines para tratar su enfermedad, no son prueba suficiente para demostrar una pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica, pues no se aportaron facturas o comprobantes de pago que respaldaran sus decires.

Respecto al daño moral, ha de evaluarse las consecuencias psicológicas y personales, angustias o trastornos emocionales soportados como consecuencia del daño padecido por la enfermedad, perjuicios que valga indicar, han de estar debidamente demostrados y cuya carga está en cabeza de quien los pretende y su tasación (precio del dolor), queda a discreción del juzgador, teniendo en cuenta el principio de dignidad humana consagrado en los artículos 1º y 5º de la Constitución Política.

De los documentos obrantes a fls 31 a 65 del expediente se evidencia la evolución de la patología padecida por el actor. Entre las muchas anotaciones, exámenes y citas médicas referenciadas, la sala resalta que el 23 de junio de 2008, al demandante le fue practicada *“laminectomía L4 L5, exportación de canal, liberación de la raíz L5 derecha, artrodesis posterior. A pesar del manejo quirúrgico, persiste el dolor lumbar”* (fl. 56), es decir, la intervención no tuvo resultados positivos, lo cual, en armonía con la copia de historial médico de salud ocupacional visible a fls. 148 a 176, demuestra que las molestias lumbares del actor, producto de su enfermedad laboral, se han presentado por alrededor de 27 años.

En consecuencia, dado que los reportes clínicos del actor evidencian que sus molestias lumbares tienen inicio alrededor del año 1994, lo cual lo llevó incluso a ser intervenido quirúrgicamente en el año 2008 sin evidenciar mejoría, tiene esto lógicamente repercusiones en el estado anímico de los demandantes.

Para el caso del actor, es corroborado por el diagnóstico padecido, el cual, valga recordar, es trastorno depresivo asociado a espalda fallida, habiendo padecido molestias producto de su enfermedad profesional por alrededor de 27 años.

Con relación a la señora Doris María, se tiene que están acreditados los lazos familiares de los demandantes y la afectación a actitud o disposición en la vida emocional, para la Sala se encuentran probados los perjuicios con el testimonio de Luz Marina Cartagena Balzar, quien afirmó que la demandante ha padecido dolor, tristeza y estrés por los quebrantos de salud de su esposo, aspectos éstos que son importantes de

resaltar, ya que el hecho que un tercero ajeno al núcleo familiar perciba la afectación emocional es prueba para la causación del perjuicio moral.

Ahora bien, frente al monto de los perjuicios morales, a juicio de esta corporación, deben tasarse en la suma equivalente a 40 SMLMV en favor del señor Jaime León Naranjo Cruz, razón por la cual habrá de modificarse esta condena.

Frente a Doris María Ceballos Londoño, la sala no modificará la decisión adoptada en primera instancia, ya que, más allá de los decires de la testigo Luz Marina Cartagena Balzar, no hay más elementos de prueba con los que la sala pueda conceder una condena superior a la dispuesta por el juez de primera instancia.

Daño a la salud, se tiene que éste comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud en diversas expresiones corporales o relacionales (v.g daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

La Corte suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral en sentencia SL 440 de 2021 advierte que el Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 ag. 2014, rad. 31170, volvió al criterio expuesto en las decisiones CE, Sección Tercera, 14 sep. 2011, radicados 19031 y 38222, en las cuales, en lo que interesa, se precisó que los daños a la vida de relación y a la alteración de las condiciones de existencia eran categorías autónomas que no comprendían el daño a la salud o afectación a la integridad psicofísica. De allí que no es procedente equiparar de manera indistinta los daños a la vida en relación a los daños a la salud como lo hizo el a quo en la parte motiva de la providencia (min 38:53).

Por ello, ha de advertirse que, conforme a las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, expos. 31.172 y 31.170 proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así pues, a partir de los precedentes invocados, la reparación al daño en la salud está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN	VÍCTIMA
Igual o superior al 50%	100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10 SMMLV

Adicionalmente, en casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 S.M.L.M.V. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

Así, el operador judicial debe tener en cuenta las siguientes variables conforme a lo que se encuentre probado en cada caso concreto: - La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente) - La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental. -La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano. - La reversibilidad o irreversibilidad de la patología. - La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal

o rutinaria. - Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria. - Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado. - Los factores sociales, culturales u ocupacionales. - La edad. - El sexo. - Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima. - Las demás que se acrediten dentro del proceso.

Con aplicación de las variables referidas, la liquidación del daño a la salud se efectuará conforme a la siguiente tabla:

CONCEPTO	CUANTÍA MÁXIMA
Regla general	100 SMMLV
Regla de excepción	400 SMMLV

De esta manera, para la causación del daño a la salud, la Sala acoge los criterios contenidos en las sentencias previamente enunciadas, así, al contar el demandante con una pérdida de capacidad laboral del 34.22% producto de una enfermedad de origen laboral por culpa de su empleador, lleva a concluir que efectivamente hay daño a la salud el cual debe de ser reparado por el empleador omiso en el cumplimiento de sus obligaciones, empero, contrario a lo estableciendo por el juez de primera instancia, la condena por este concepto debido a la gravedad de la lesión sufrida por el demandante, debió ascender a la suma de 60 SMMLV y no a 12 SMMLV, lo cual, con los alcances de la sentencia C 968 de 2003, y el principio iura novit curia, implica entonces modificar la condena en este sentido.

Ahora, no encuentra la sala circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud para otorgar una indemnización mayor por este concepto.

Sobre el daño en la vida de relación, en sentencia SL492 de 2021 la Corte señaló que este consiste en una afectación a la aptitud y disposición para disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales, que impide que algunas actividades ya no se puedan realizar o que requieren de un esfuerzo o genera incomodidades y dificultades. En otros términos, este daño tiene su expresión en la

esfera externa del comportamiento del individuo, *«en las situaciones de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social que se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o económico (...)»* (CSJ SC665-2019). Y, al igual que los morales, no son estimables objetivamente y su tasación también está sujeta al criterio judicial, línea esta que se corrobora en sentencias como la CSJ SL 1361 de 2019, reiterando lo dispuesto frente a este tópico en las sentencias CSJ SL, 22 ene. 2008, rad. 30621, SL, 30 oct. 2012, rad. 39631 y la SL4913-2018: *«se originan por el «menoscabo en la vida de relación social, que no se equipara a la aflicción íntima, que se padece en el interior del alma, calificada como daño moral subjetivo, ni tampoco con la pérdida de la capacidad laboral, que es estimable en dinero a partir del grado de invalidez establecido por las Juntas Calificadoras; es el daño que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales; es una afectación fisiológica, que aunque se exterioriza, es como la moral, inestimable objetivamente, y por tanto inevitablemente sujeta al arbitrio judicial»*. A su vez, los denominados **perjuicios fisiológicos**, las sentencias CSJ SL, 30 oct 2012. Rad. 39631, SL18360-2017 y SL 1110 de 2018 señalan que los mismos han de ser entendidos como la pérdida o afectación de aquellas posibilidades de realizar actividades de la vida común y en sociedad, que aun cuando no son patrimoniales, hacen parte de una existencia agradable.

Así pues, el órgano de cierre en materia laboral, ha desarrollado de manera conjunta o equiparable lo que hoy en día es conocido como "perjuicios fisiológicos o daño a la vida en relación"

Entonces, perjuicios fisiológicos o daño a la vida en relación se concretan en la limitación del disfrute de la vida en los entornos que venía gozando la persona y que hoy, dada la afectación, no puede hacerlo o no de la misma manera, es decir, que dicha perturbación lesiona el goce de los placeres de su existir, en sus condiciones personales y sociales.

Para el caso que nos ocupa, se tiene que la activa manifiesta que los perjuicios fisiológicos son muy bajos, no obstante, del análisis previamente realizado, se concluye que sobre los mismos no se efectuó condena alguna, y ello a razón de haberseles equiparado con el daño a la salud, por lo que, atendiendo a los principios de consonancia y congruencia, ha de adicionarse a la sentencia de primera instancia lo relativo a la condena de daños a la vida en relación o perjuicios fisiológicos, toda vez que los mismos fueron solicitados con el escrito de demanda³ y fue materia de inconformismo en la sustentación del recurso de apelación.

Conforme a lo anterior, partiendo de las anotaciones realizadas en las diferentes calificaciones de pérdida de capacidad laboral del actor, se evidencia que el demandante, producto de su enfermedad profesional, se ha visto afectado al realizar tareas cotidianas como subir escalas y destapar elementos (fls. 52), sumado a ello, la lógica y sana crítica llevan a concluir que una persona que padece las limitaciones cervicales del señor Jaime León, las cuales están plenamente probadas, llevan a concluir que la práctica de actividades deportivas son limitadas o nulas, tales como el fútbol, atletismo y natación, éstas, según documento visibles a fls 37, 191 y 181, eran realizadas por el demandante, además de levantar objetos ligeramente pesados, o efectuar otro tipo de acciones placenteras de tipo social, personal y familiar con su cónyuge.

En consecuencia, la Sala adicionará a la decisión de primera instancia la condena a la demandada a la suma de 30 SMLMV por perjuicios fisiológicos o daños a la vida en relación, los que serán indexados al momento de su pago.

Quedan de esta forma resueltos los asuntos objeto de impugnación.

Costas en primera instancia como dispuso el a quo.

Sin costas en esta instancia.

³ Fl. 5

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** en forma parcial la sentencia de primer grado por las razones aquí expuestas; **LA REVOCA** en lo relativo a la condena impuesta a la demandada por concepto de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro; **ADICIONA** la condena a cargo de la demandada y en favor del señor JAIME LEÓN NARANJO CRUZ en la suma equivalente a 30 SMMLV indexados al momento de su pago por concepto de perjuicios fisiológicos o daños a la vida en relación y **LA MODIFICA** en lo relativo a los montos de las condenas por perjuicios morales y daño a la salud en favor de JAIME LEÓN CRUZ, en su lugar, se condena a la demandada a cancelarle la suma de 40 SMMLV por concepto de perjuicios morales y 60 SMMLV por concepto de daño a la salud.

Costas en primera instancia en los porcentajes que dispuso el a quo.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

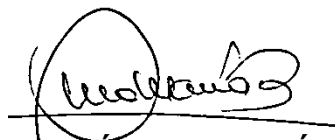
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 104 publicados por medios digitales el 17 de junio de 2021